

27 de enero de 2025

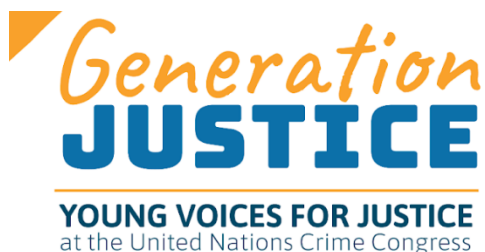
Original: Español e inglés únicamente

**Reunión Preparatoria Regional de
América Latina y el Caribe para el 15º
Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal**
San José, 4 a 6 de febrero de 2025

**Recomendaciones de la consulta juvenil “Generación Justicia” en la
región de América Latina y el Caribe***

* El presente informe se reproduce en la forma en que lo recibió la Secretaría.





Recomendaciones de la consulta juvenil “Generación Justicia” en la región de América Latina y el Caribe

Generation Justice (GenJust) es una iniciativa lanzada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en 2024 con el objetivo de hacer del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal el más inclusivo para los jóvenes en la historia. Su principal objetivo es crear espacios que amplifiquen las voces de las generaciones más jóvenes, fomentando su participación activa en los procesos intergubernamentales. Para lograr esto, se seleccionaron representantes juveniles de África, Asia-Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe, y Asia Occidental, para servir como Representantes de GenJust, asegurando que las perspectivas de los jóvenes de diversos contextos estén plenamente integradas en el proceso preparatorio y en las discusiones del Congreso.

Como parte de la preparación para la Reunión Regional Preparatoria de América Latina y el Caribe, los representantes juveniles de la región realizaron diversas actividades para asegurar una participación significativa de los jóvenes. Se lanzó una encuesta en línea para recopilar las opiniones de jóvenes de entre 15 y 29 años de toda América Latina y el Caribe y capturar sus perspectivas sobre los temas clave para el Congreso. Adicionalmente, se realizaron consultas juveniles local en Argentina y Brasil para profundizar el compromiso y abordar preocupaciones específicas de la región.

Basándose en los hallazgos de estas actividades, se celebró en línea la Consulta Juvenil Regional de América Latina y el Caribe el 20 de enero de 2025. Durante esta consulta, los representantes juveniles de toda la región analizamos los datos recopilados en las encuestas y consultas, y colaboramos en la creación de recomendaciones. Estas recomendaciones fueron diseñadas para reflejar las preocupaciones y prioridades de los jóvenes de América Latina y el Caribe y asegurar que sus voces estuvieran al centro de las discusiones en la reunión preparatoria regional que tendrá lugar del 4 al 6 de febrero del 2025 en San José, Costa Rica.

Con base en los conocimientos obtenidos a través de estos ejercicios de consulta, hemos desarrollado una lista de recomendaciones que subrayan la necesidad de estrategias innovadoras y basadas en evidencia para la prevención del delito, la protección de grupos vulnerables como mujeres, niños y jóvenes, y asegurar el acceso igualitario a la justicia mientras se preserva el estado de derecho. Al abordar estas áreas clave, buscamos fomentar sociedades más seguras y equitativas y apoyar el desarrollo de políticas inclusivas que resuenen con las aspiraciones de los jóvenes de América Latina y el Caribe.

Se insta a los Estados miembros a reconocer la importancia de estas recomendaciones e incorporarlas activamente en sus discusiones y decisiones. Hacemos un llamado a los representantes de los Estados para que promuevan las perspectivas juveniles y prioricen la integración de nuestra voz colectiva en resultados concretos en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal.

Seminario “Construir sociedades resilientes, con especial atención a la protección de las mujeres, los niños y las personas jóvenes: fomentar la participación, la educación y la cultura de la legalidad”

1. Integrar una perspectiva de género en los presupuestos nacionales y locales para garantizar recursos para programas de atención a la violencia de género, incluyendo campañas de prevención, salud y educación.
2. Priorizar la prevención y respuesta a los delitos de género, como el feminicidio, destinando recursos para medidas especializadas como tribunales de feminicidio e implementando mecanismos de supervisión estrictos para monitorear las decisiones judiciales. Los jueces cuyos fallos descuiden la protección de las víctimas o muestren sesgos deberán ser investigados de forma independiente y responsabilizados.
3. Crear campañas de sensibilización en las escuelas y establecer instituciones enfocadas en el bienestar infantil. Desarrollar leyes específicas para la protección infantil frente al abuso (sexual, físico, emocional) para asegurar una protección integral, especialmente para poblaciones vulnerables.
4. Incrementar la disponibilidad de refugios financiados por el gobierno que ofrezcan apoyo psicológico, médico y legal a las víctimas de violencia.
5. Invertir en programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos y fuerzas de seguridad locales, con énfasis en derechos humanos, sensibilidad de género y enfoques étnico-territoriales. Priorizar estrategias de seguridad sostenibles que refuercen la confianza comunitaria, profesionalicen a las agencias locales y fomenten el compromiso comunitario.
6. Aumentar la presencia de las fuerzas de seguridad pública en áreas de alto riesgo, respaldadas por estrategias integrales que aborden la salud, la educación y las oportunidades económicas para atacar las causas profundas de la violencia. Asegurar la alineación entre las asignaciones presupuestarias y las responsabilidades ministeriales para mejorar la implementación efectiva de tales estrategias.
7. Revisar las leyes existentes para identificar y abordar desigualdades o vacíos que puedan dejar desprotegidas a las víctimas. Desarrollar métodos educativos innovadores con formatos accesibles y términos legales simplificados para involucrar a audiencias diversas y mejorar la comprensión del sistema judicial. Establecer directrices claras y "mapas de proceso" para leyes complejas que involucren a múltiples Ministerios o Departamentos Estatales.
8. Promover un modelo de gobernanza colaborativa que involucre a las comunidades étnicas locales, la sociedad civil y el sector privado en los procesos de toma de decisiones a través de mecanismos de escucha activa y programas de formación en liderazgo social. Para asegurar la inclusividad, invertir en la creación de espacios de participación cívica en áreas rurales y aisladas.
9. Establecer consejos juveniles y foros participativos como plataformas para la toma de decisiones inclusiva, asegurando la participación activa de grupos marginados y vulnerables. Promover la equidad y la diversidad a través de cuotas para mujeres en los espacios de toma de decisiones.
10. Implementar innovaciones tecnológicas en los sistemas de recolección de datos para mejorar la calidad de los datos y apoyar decisiones de políticas públicas informadas.

Seminario 2: “Garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas: hacia unas sociedades seguras en el marco del respeto del estado de derecho”

1. Establecer códigos de conducta para los funcionarios electos en Parlamentos y Asambleas Nacionales, asegurando la rendición de cuentas y la conducta ética.
2. Fortalecer la independencia judicial previniendo conflictos de interés, promoviendo un proceso de nombramiento transparente y basado en méritos para los jueces, y reforzando la separación de poderes.
3. Implementar robustas protecciones legales para los denunciantes dentro del sistema judicial, protegiendo a las personas que expongan prácticas poco éticas de represalias.
4. Establecer tribunales independientes para monitorear, evaluar y hacer cumplir las medidas anticorrupción dentro del sistema judicial en colaboración con organizaciones intergubernamentales. Asegurar la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo y evaluación del desempeño del sistema judicial.
5. Fomentar la participación multisectorial en la reforma judicial mediante la involucración de actores públicos, privados y de la sociedad civil.
6. Desarrollar políticas nacionales mediante consultas para regular el uso de la IA y otras tecnologías en el sistema de justicia penal, asegurando su implementación ética y responsable.
7. Crear Tribunales Nacionales de Derechos Humanos independientes para supervisar y abordar violaciones a los derechos humanos, asegurando que permanezcan libres de interferencias políticas o manipulaciones.
8. Establecer clínicas de asistencia jurídica con abogados especialmente capacitados y recursos adecuados para proporcionar acceso a la justicia en las comunidades más vulnerables.
9. Colaborar con ONGs y el sector legal privado para ofrecer asistencia legal a personas que no califican para asistencia jurídica pero no pueden permitirse representación privada.
10. Desarrollar procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de los migrantes, incluyendo la provisión de traductores, financiación para consejeros legales, y apoyo financiero para los gastos judiciales, incluyendo vestimenta adecuada.



Recommendations from the Generation Justice youth consultation in Latin America and the Caribbean

Generation Justice (GenJust) is an initiative launched by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2024 to make the 15th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice the most youth-inclusive in history. Its primary goal is to create spaces that amplify the voices of younger generations, fostering their active participation in intergovernmental processes. To achieve this, young representatives were selected from Africa, Asia-Pacific, Europe, Latin America & the Caribbean, and Western Asia to serve as GenJust Representatives, ensuring that the perspectives of young people from diverse backgrounds are fully integrated into the preparatory process and the discussions at the Congress.

As part of the preparation for the Latin America & the Caribbean Regional Preparatory Meeting, youth representatives from the region have conducted various activities to ensure meaningful youth participation. An online survey was launched to gather input from young people aged 15 to 29 across Latin America and the Caribbean and capture their perspectives on key topics for the Congress. In addition, local youth consultation exercises were conducted in Argentina and Brazil to deepen engagement and address region-specific concerns.

Building on the findings of these activities, the Latin America & the Caribbean Regional Youth Consultation was held online on January 20, 2025. During this consultation, youth representatives from across the region analysed the data collected in the surveys and consultations and collaborated to finalize a set of recommendations. These recommendations were designed to reflect the concerns and priorities of young people across Latin America and the Caribbean and ensure their voices are central to discussions at the regional preparatory meeting to be held from 4 to 6 February 2025 in San José, Costa Rica.

Informed by the insights gathered through these consultation exercises, we have developed a list of recommendations that emphasize the need for innovative and evidence-based crime prevention strategies, the protection of vulnerable groups such as women, children, and youth, and ensuring equal access to justice while upholding the rule of law. By addressing these key areas, we aim to foster safer, more equitable societies and support the development of inclusive policies that resonate with the aspirations of youth across Latin America and the Caribbean.

Member States are invited to recognize the importance of these recommendations and actively incorporate them into their discussions and decisions. We call on state representatives to champion youth perspectives and prioritize integrating our collective voice into actionable outcomes at the 15th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice.

Workshop 1: Building resilient societies, with a focus on protecting women, children and youth – fostering engagement, education and the culture of lawfulness

1. Integrate a gender perspective into national and local budgets to guarantee resources for programs addressing gender violence, including prevention, health, and education campaigns.
2. Prioritize prevention and response to gender-based crimes, such as femicide, by allocating resources for specialized measures like femicide courts and implementing strict oversight and auditing mechanisms to monitor judicial decisions. Judges whose rulings neglect victim protection or display bias should be independently investigated and held accountable.
3. Create awareness campaigns in schools and establish institutions focused on child well-being. Develop specific child-centred laws addressing abuse (sexual, physical, emotional) to ensure comprehensive protection, especially for vulnerable populations.
4. Increase the availability of government-funded shelters offering psychological, medical, and legal support to victims of violence.
5. Invest in training and capacity-building programs for public officials and local security forces, emphasizing human rights, gender sensitivity, and ethnic-territorial approaches. Prioritize sustainable security strategies that enhance community trust, professionalize local agencies, and foster community engagement.
6. Increase public security force presence in high-risk areas, supported by comprehensive strategies addressing health, education, and economic opportunities to tackle the root causes of violence. Ensure alignment between budget allocations and Ministerial responsibilities to enhance the effective implementation of strategies.
7. Review existing laws to identify and address inequalities or gaps that may fail to protect victims. Develop innovative educational methods with accessible formats and simplified legal terms to engage diverse audiences and improve understanding of the judicial system. Establish clear guidelines and 'process maps' for complex laws involving multiple Ministries or State Departments.
8. Promote a collaborative governance model involving local ethnic communities, civil society, and the private sector in decision-making processes through active listening mechanisms and training programs in social leadership. To ensure inclusivity, invest in creating civic participation spaces in rural and isolated areas.
9. Establish youth councils and participatory forums as platforms for inclusive decision-making, ensuring the active participation of marginalized and vulnerable groups. Promote equity and diversity through quotas for women in decision-making spaces.
10. Implement technological innovations in data collection systems to enhance data quality and support informed public policy decisions.

Workshop 2: Ensuring equal access to justice for all – towards safe and secure societies while respecting the rule of law

1. Establish codes of conduct for elected officials in Parliaments and National Assemblies, ensuring accountability and ethical behaviour.
2. Strengthen judicial independence by preventing conflicts of interest, promoting a transparent and merit-based appointment process for judges, and reinforcing the separation of powers.
3. Implement robust legal protections for whistleblowers within the justice system, safeguarding individuals who expose unethical practices from retaliation.

4. Establish independent tribunals to monitor, evaluate, and enforce anti-corruption measures within the justice system in collaboration with intergovernmental organizations. Ensure the active participation of civil society organizations in monitoring and evaluating the performance of the justice system.
5. Encourage multi-sectoral participation in judicial reform by involving public, private, and civil society actors.
6. Develop national policies through consultations to govern the use of AI and other technologies in the criminal justice system, ensuring ethical and responsible implementation.
7. Create independent National Human Rights Tribunals to oversee and address human rights violations, ensuring they remain free from political interference or manipulation.
8. Establish legal aid clinics staffed by specially trained attorneys and equipped with adequate resources to provide access to justice in the most vulnerable communities.
9. Collaborate with NGOs and the private legal sector to offer legal assistance for individuals who do not qualify for legal aid but cannot afford private representation.
10. Develop procedures to ensure migrants' access to justice, including providing translators, funding for legal counsel, and financial support for court-related expenses, including appropriate attire.
